

*Campo, ¿Edén Mexicano?***Los Negros Datos Oficiales**

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

**L**AS carreras políticas del jefe del Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización y del líder de la Confederación Nacional Campesina han seguido rutas paralelas. Sucesor éste de aquél al frente de la organización oficial de los campesinos pobres del país (los ricos se agrupan en otra central también perteneciente al PRI que así obra el milagro de conciliar intereses contrarios y contradictorios) no es infrecuente que hagan planteamientos convergentes. Ahora, en coincidencia también tuercen la lógica para hacernos creer que en el campo mexicano la situación mejora rápidamente.

Jaime Reyes Estrada los interrogó (EXCELSIOR, 3 de enero) acerca de lo que cuatro ex dirigentes agrarios dijeron a Manuel Mejido (EXCELSIOR, 2 de enero) sobre la situación rural mexicana. Según el secretario general de la Campesina y su más inmediato antecesor, las afirmaciones de Noradino Rubio, Sacramento Joffre, Bonifacio Moreno y Alfonso Dorantes, de que después de 40 años de reforma agraria sigue habiendo en el campo miseria, insalubridad, hambre, caciquismo y explotación son "mentira en gran parte". Y ¿saben ustedes por qué? "Porque el actual gobierno trabaja para evitarlo".

Esto puede ser cierto —y los declarantes hacen bien en manifestarlo pues, cada uno a su modo, ambos son funcionarios del régimen— pero no invalida la afirmación anterior. No se puede negar que un enfermo tenga cáncer sólo porque se hacen esfuerzos por curarlo. Si lo que dicen los ex líderes es mentira, eso quiere decir que las lacras que apuntan no existen. Luego, ¿"el actual gobierno trabaja para evitar" lo que no existe?

★  
**V**EAMOS algunos hechos. Los campesinos casi no tienen atención médica, como lo muestra, de manera indirecta, esta información: Para atender a 10 millones de derechohabientes, el IMSS contó en 1970 con unos seis mil millones de pesos; para los suyos —1.3 millones de personas— el I.S.S.S.T.E. dispuso de tres mil millones. Si se restan las personas que pueden pagar atención médica privada, se tiene que la Secretaría de Salubridad debe atender a 25 millones de personas, entre las cuales están los campesinos, con mucho menos que esas cantidades: 1,600 millones de pesos.

Hay miseria y explotación en el campo según lo indican datos como los siguientes, tomados al azar de informes oficiales: hay 3.5 millones de campesinos sin tierra, con derechos a salvo (es lo único que tienen a salvo, por lo demás); la parcela ejidal, que debe tener un mínimo de 20 hectáreas de temporal y 10 de riego, tiene en la práctica un promedio de sólo 6.5; el 50 por ciento de las ventas agrícolas procede del 2 por ciento de los predios particulares; el 30 por ciento del área regada es del 3 por ciento de los usuarios; el 1 por ciento de los predios cuentan con equipo que valga en promedio más de cien mil pesos.

El carácter dual de la agricultura mexicana muestra que en el campo hay hambre. En los predios con cultivos de subsistencia, hubo en 1960 (últimos datos censales disponibles) medio millón de campesinos que sólo produjeron 730 pesos al año, en promedio. En cambio los cultivadores de 12,000 predios (el 0.5 por ciento del total) produjeron, en promedio, 385,000 pesos anuales, la suma de lo cual constituyó el 32 por ciento del producto agrícola nacional.

Negar la realidad no la hace desaparecer. Si repartir la tierra no ha resuelto el problema rural, repartir dinero tampoco lo resolverá. Asimismo, dictar una ley no basta para enmendar los hechos. Aplicarla requiere decisión política y racionalidad histórica.

## Un Nombre Limpio

# Otomíes Despojados y Presos

POR MIGUEL ANGEL GRANADOS CHAPA

**H**AY una especie de presos políticos por cuya suerte no se reclama. Son las víctimas de cacicazgos —esos que se van a acabar con la aplicación de la ley federal agraria— y de trastupijos en el campo. Acaso suman miles en el país. Ahora mismo, hay por lo menos diez en la cárcel de Pachuca, la capital hidalguense.

Alejandro Iñigo, reportero de EXCELSIOR, recogió en Ixmiquilpan, el Día de los Reyes, una denuncia que se publicó al día siguiente. Parecía un drama rural común y corriente: una resolución en favor de los comuneros de Dios Padre, que sólo data de 1947, no ha podido ser cumplida. Cada vez que hacen gestiones para tomar posesión de sus tierras, los campesinos son agredidos. Ya ha habido varios muertos.

En esta última ocasión, los despojadores intentaron asesinar al líder de los comuneros, que ahora anda a salto de mata. A cambio de ese fugitivo, diez de sus seguidores fueron encarcelados, el 10. de enero. En el entretanto, la pequeña hija de uno de ellos murió en pleno desamparo, y su mujer recurrió a la caridad de los pobres, la única que existe para enterrarla.

Valientes, o desesperados, o equivocados, los comuneros denunciaron como uno de los despojadores al profesor y licenciado Manuel Sánchez Vite, gobernador hidalguense en disfrute de una tercera licencia y líder nacional del PRI, el partido que sostiene las banderas de la revolución agraria y que agrupa, para defenderlos, a los campesinos de todo el país. La acusación fue hecha pública el 7 de enero. Poco después de las 8.30 de la mañana de ese día, el reportero de EXCELSIOR, Francisco Cárdenas Cruz habló con MSV, quien negó los cargos y autorizó: "Puede usted informar que yo personalmente haré llegar al licenciado Gómez Villanueva la denuncia de esa gente para que investiguen".

★

**C**ELERISIMO investigador, el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización empleó unas siete horas en determinar "que el profesor y licenciado Manuel Sánchez Vite no es propietario de tierras ni tiene que ver en la disputa por los terrenos comunales en Dios Padre..." Al atardecer de ese mismo día, informó a la prensa, en esos términos, del resultado de la veloz indagación.

(No siempre ha actuado tan prestamente el DAAC. Por si no bastara el ejemplo de los 24 años de incumplimiento de la resolución relativa a la comunidad citada, tampoco ha resuelto un caso semejante, que afecta a los comuneros de un pueblo vecino, el de Patria Nueva, cuyos agresores asesinaron a 10 campesinos en 1968. A pesar de que hay ya hasta un fallo de la Suprema Corte —lo que da idea de la vejez del asunto— no se ha acordado el deslinde de tierras).

El propio profesor Sánchez Vite dirigió a este periódico una carta en que asimismo niega la acusación en su contra. Hizo bien en proteger su reputación. La investigación del DAAC dejó limpio su nombre. Pero la imputación que se le hizo es un hecho meramente circunstancial. Quedan en pie cuestiones de fondo. Urge averiguar quiénes son los despojadores y castigarlos. Como es necesario, también, precisar la situación jurídica de los presos en Pachuca, al parecer sin motivo legal alguna.

El caso, por lo demás, es significativo de lo que sucede en Hidalgo, entidad pobre en país de escaseces. Allí, por sólo citar dos cifras, la superficie media ejidal es de 3.49 hectáreas; y el 81.6 por ciento de la población económicamente activa tenía, según un estudio oficial de la SIC, un ingreso inferior a 749 pesos mensuales.

Se esperaría que, además del afán por dejar limpio su nombre, un dirigente político nacional, de un partido que dice fincarse en el pueblo, hubiera hecho alguna instancia en favor de los otomíes injustamente despojados, esposados, asesinados y presos.